

**TRIBUNAL CALIFICADOR DE LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL INGRESO EN EL CUERPO
SUPERIOR DE LETRADOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS**

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas (Boletín
Oficial del Estado núm. 308, de 22 de diciembre de 2016)

CUARTO EJERCICIO

8 DE ENERO DE 2018

I- ENUNCIADO DEL CASO PRÁCTICO

El 2 de febrero de 2015 se inició la fiscalización del Ayuntamiento de Ágape, ejercicio 2012, habiéndose aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas el 1 de noviembre de 2015 el informe de fiscalización. El Ministerio Fiscal solicitó con relación a ciertos hechos recogidos en este informe, de los que a su juicio podría derivarse la existencia de responsabilidad contable, que fuesen turnados para su conocimiento al Consejero de Cuentas que correspondiese de la Sección de Enjuiciamiento y que se propusiese a la Comisión de Gobierno el nombramiento de Delegado Instructor. Estos hechos eran los siguientes:

1) El Alcalde del Ayuntamiento de Ágape otorgó tres subvenciones públicas sin que existiese la debida justificación de las mismas:

- Una subvención por importe de 300.000 € a la sociedad La Colina S.A.
- Una subvención por importe de 200.000 € a la sociedad La Herradura S.A.
- Una subvención por importe de 250.000 € a la sociedad El Buque S.A.

2) El Ayuntamiento de Ágape fue condenado por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ágape de 10 de enero de 2012, confirmada por la del Tribunal Superior de Justicia de 7 de septiembre de 2012, a pagar la cantidad de 370.000 € por haber ocupado por la vía de hecho una finca que no le pertenecía.

3) El Alcalde del Ayuntamiento de Ágape como presidente de la Junta General de la sociedad mercantil municipal Suministros S.L. firmó un aval que fue ejecutado por la falta de pago de dos cuotas de un préstamo personal que se concedió a una empresa privada que suministraba comida al Ayuntamiento ascendiendo la cantidad pagada a 250.000 €.

4) El Alcalde del Ayuntamiento de Ágape firmó un contrato de arrendamiento pactando una actualización de la renta por encima del IPC, lo que dio lugar a que con cargo a los fondos públicos se pagase en exceso 9.113,58 €.

Turnado el procedimiento a uno de los Consejeros de Cuentas de la Sección de Enjuiciamiento se acordó oír a la representación del Ayuntamiento de Ágape sobre el nombramiento de delegado instructor, manifestando ésta su conformidad con dicho nombramiento.

Una vez nombrado delegado instructor se practicaron las diligencias oportunas de averiguación previstas en el art. 47 de la Ley 7/88 y se citó al Ministerio Fiscal, al Ayuntamiento

de Ágape, a quien fue Alcalde desde mayo de 2007 hasta abril de 2015, al Interventor y a las sociedades perceptoras de las subvenciones, a la práctica de la Liquidación Provisional para el día 1 de octubre de 2016. No comparecieron a dicho acto ni el Interventor, ni la sociedad La Herradura S.A. a la que no se le pudo practicar la citación por no haberse podido localizar domicilio alguno donde hacer la notificación. En el Acta de Liquidación Provisional el delegado instructor concluyó de manera previa y provisional la existencia de un menoscabo para los caudales públicos por los hechos anteriormente descritos, declarando responsables contables directos a quien fue Alcalde del Ayuntamiento, al Interventor y a las sociedades perceptoras de las subvenciones.

De conformidad con lo dispuesto en el citado art. 47 de la Ley 7/88 se requirió a los presuntos responsables contables para que depositasen o afianzasen el importe del presunto alcance, y al no haber cumplimentado ninguno de ellos dicho requerimiento, se acordó posteriormente el embargo del salario del Interventor.

Una vez pasadas las actuaciones al Consejero de Cuentas para tramitar el correspondiente procedimiento de reintegro por alcance se emplazó a quienes habían sido citados a la Liquidación Provisional y se hizo la publicación de edictos. No pudo practicarse la notificación de la sociedad La Herradura S.A., al no ser recogidas las notificaciones en el domicilio al que se remitieron. Se practicaron diligencias de averiguación de este domicilio y se recibieron los escritos de personación del Ministerio Fiscal, del Ayuntamiento de Ágape, de quien fue Alcalde cuando ocurrieron los hechos enjuiciados y de las sociedades La Colina S.A. y El Buque S.A.

La representación del Ayuntamiento de Ágape presentó demanda dentro del plazo concedido para ello pidiendo la declaración de responsabilidad contable por los hechos y contra los responsables contables recogidos en el Acta de Liquidación Provisional. Se dio traslado de la demanda a los demandados, a excepción de la sociedad La Herradura S.A., que no pudo ser localizada, y se recibieron escritos de contestación de quien ejerció el cargo de Alcalde y de las sociedades La Colina, S.A. y El Buque S.A. En el acto de la audiencia previa el Ministerio Fiscal se adhirió a la demanda presentada por la representación del Ayuntamiento de Ágape

II- ACTUACIONES QUE LOS SRES. OPOSITORES DEBEN REALIZAR EN RELACIÓN CON EL CASO PRÁCTICO QUE SE PLANTEA

Se deberá dar respuesta motivada a las cuestiones que se plantean en la PRIMERA PARTE, y se elaborará una propuesta de resolución en los términos indicados en la SEGUNDA PARTE.

PRIMERA PARTE

Se pide que el opositor indique, motivadamente, qué trámite o trámites deben a su juicio realizarse señalando, en su caso, la resolución o resoluciones que procede dictar y si cabe recurso contra las mismas, en relación con los siguientes hechos o circunstancias acaecidas durante la sustanciación del proceso:

1. El Interventor recibió todas las notificaciones que se practicaron tanto en actuaciones previas como en el procedimiento de reintegro por alcance, pero no se personó ni contestó a la demanda.

2. Como consecuencia de las diligencias de averiguación del domicilio de la sociedad La Herradura S.A. se recibió nota informativa simple del Registro Mercantil en el que constaba que esta sociedad estaba extinguida.

3. La representación de la sociedad La Colina S.A. se personó en el trámite conferido para ello. También se recibió un escrito de personación del administrador concursal de dicha mercantil en el que:

1º) Pedía que se le tuviese por personado en el proceso dándole traslado en el momento procesal oportuno de la demanda para poderla contestar si a su derecho conviniera.

2º) Alegaba que el Tribunal de Cuentas no era competente para conocer de los hechos referidos a la sociedad La Colina S.A. ya que la competencia para conocer de toda acción de naturaleza civil y trascendencia penal dirigido contra ella correspondía al juez que conocía del concurso por tratarse de competencia exclusiva y excluyente ex art. 8.1 de la Ley Concursal.

Habiéndose dado traslado de este escrito al Ministerio Fiscal y a la representación del Ayuntamiento de Ágape se opusieron a la alegación de falta de competencia.

4. La representación de la sociedad de El Buque S.A. en su escrito de personación alegó que existía una causa penal por los mismos hechos de los que estaba conociendo el Tribunal de Cuentas con relación a su representada, y solicitó que este Tribunal requiriese al órgano de la jurisdicción penal que conocía de los mismos para que se inhibiese de enjuiciar la pretensión civil y contable.

5. La representación de la sociedad de El Buque S.A. en su escrito de contestación pidió la desestimación de la demanda y formuló reconvención contra el Ayuntamiento de Ágape pidiendo que se dictase resolución por la que se acordase la responsabilidad contable directa de éste, ya que fue la Corporación Local la que dio lugar con sus actos a que se entregase el importe de la subvención a su representada.

6. La representación de quien fue Alcalde del Ayuntamiento en el momento de producirse los hechos enjuiciados pidió en su escrito de contestación la desestimación de la demanda e interesó la intervención como parte demandada de varios Concejales del Ayuntamiento al amparo de lo dispuesto en el art. 14.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Ministerio Fiscal y la representación del Ayuntamiento de Ágape se opusieron a esta pretensión.

7. La representación del Ayuntamiento de Ágape presentó un escrito indicando que en este Tribunal de Cuentas se estaba tramitando por otros hechos un procedimiento de reintegro por alcance contra quien fue Alcalde de esta Corporación Local desde 2007 a 2015 y que en dicho proceso estaba embargada la parte correspondiente de su pensión de jubilación. Señalaba en su escrito que dicho proceso acababa de ser archivado y que se iba a proceder a levantar el embargo acordado. En el presente procedimiento pedía como medida cautelar, para garantizar las posibles responsabilidades contables que en su día pudieran ser declaradas, que se acordase el embargo de esa pensión y de las cantidades que ya habían sido retenidas hasta ese momento. La representación del Alcalde se opuso a dicha petición por entender que no concurrían los requisitos legalmente previstos para ello.

SEGUNDA PARTE

Se solicita que el opositor redacte los Fundamentos Jurídicos en los que se resuelvan las pretensiones planteadas teniendo en cuenta lo siguiente:

1) Se ha pedido la declaración de responsabilidad contable como consecuencia de la concesión de tres subvenciones públicas sin que exista la suficiente justificación, considerando la parte actora que son responsables contables directos el Alcalde, en cuanto concedente de las tres subvenciones por el importe total de éstas, y cada una de las empresas perceptoras de dichas subvenciones por el importe que les fue entregado.

De la prueba practicada en autos ha quedado probado que:

1º) La subvención concedida por importe de 300.000 € a la sociedad La Colina S.A. lo fue para realizar rutas guiadas por la sierra con el fin de fomentar el turismo de la zona. Se ha incorporado a los autos el expediente administrativo por el que se concedió la subvención constando en éste que la adjudicación se hizo de forma directa por resolución del Alcalde de 7 de marzo de 2012, sin que haya quedado acreditado porqué no se hizo una convocatoria pública. Aunque en el expediente administrativo no había justificación alguna del destino dado a los fondos entregados, la sociedad La Colina, S.A. ha aportado en la fase de prueba la justificación de la realización de las referidas rutas.

2º) La subvención concedida por importe de 200.000 € a la sociedad La Herradura S.A. lo fue para construir unos establos para la cría de caballos. No hay documentación alguna de que se haya seguido un procedimiento para la concesión de la subvención. Sólo consta en el procedimiento una resolución del Alcalde de fecha 15 de febrero de 2012 acordando conceder de forma directa dicha subvención, pero sin que esta resolución vaya acompañada de ningún otro tipo de documentación. Tampoco se ha justificado que se hubiesen construido los establos.

3º) La subvención por importe de 250.000 € se concedió por resolución del Alcalde de 5 de febrero de 2012 a la sociedad El Buque S. A. para pagar las nóminas del mes de diciembre de 2011 que se adeudaba a 20 trabajadores de dicha sociedad que se encontraban afectados por un ERE. Consta unido a los autos el expediente tramitado para la concesión de la subvención, en el que sí se ha justificado adecuadamente la adjudicación directa de la ayuda pública concedida. También está la documentación acreditativa de la concesión de la subvención, entre la que se encuentra la identificación de los trabajadores a los que debían pagarse las nóminas con indicación de sus nombres y apellidos, sus NIF, los números de las cuentas corrientes de las que eran titulares, y las cantidades que debían percibir cada uno de ellos.

Como documentación justificativa hay en el expediente administrativo un escrito del Banco CCC en el que se afirma que:

“D. Mauricio G. C., director de la oficina nº 40 del Banco CCC HACE CONSTAR QUE:

En la cuenta XXXX perteneciente a nuestro cliente EL Buque, S.A. con CIF XXXX, se abonó en fecha 31 de febrero de 2012 una transferencia procedente del Ayuntamiento de Ágape por importe de 250.000 € que se destinaron al pago de nóminas mediante el adeudo de los siguientes cargos de importes:

- 100.000 €

- 150.000 €

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Ágape, con fecha 31 de febrero de 2012."

2) Se pide también la declaración de responsabilidad contable del Alcalde por la cantidad de 370.000 € que se condenó a pagar al Ayuntamiento de Ágape por sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ágape de 10 de enero de 2012, confirmada por la del Tribunal Superior de Justicia de 7 de septiembre de 2012.

El Alcalde del Ayuntamiento de Ágape, pensando que llegaría a un acuerdo con los titulares de una finca que se encontraba en este municipio, decidió que la entidad local ocupase la misma acondicionándola como recinto ferial y realizando en ellas múltiples actos festivos de afluencia masiva. El referido acuerdo nunca se alcanzó, y los titulares de la finca reclamaron al Ayuntamiento la restitución de la posesión y ejercitaron acciones en vía contencioso-administrativa.

En la sentencia de 10 de enero de 2012 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Ágape declaró la ilicitud de la actuación material que en vía de hecho había realizado el Ayuntamiento de Ágape mediante la ocupación de la finca inscrita en el Registro de Ágape con el nº 724, debiendo proceder a la inmediata restitución a los demandantes de la posesión y uso de la finca, y reconociendo a éstos el derecho a ser indemnizados en la cantidad de 370.000 €, más los intereses legales desde la interposición del recurso.

La parte demandante entiende que el pago de la indemnización supuso un menoscabo para los caudales públicos de la Corporación Local y que es responsable contable directo quien fue Alcalde en el momento en que se ocupó la finca, ya que con dicha decisión dio lugar a la ulterior condena al pago de los 370.000 €.

3) Se pide la declaración de responsabilidad contable por la cantidad de 250.000 € que es el importe al que tuvo que hacer frente el Ayuntamiento de Ágape como consecuencia de la ejecución de un aval, considerando responsables contables directos y solidarios del mismo al Alcalde y al Interventor.

La representación del Alcalde, además de oponerse a la demanda, ha alegado con carácter previo que los hechos están prescritos, ya que el aval se suscribió el 7 de febrero de 2008 y su representado no tuvo conocimiento del presente pleito hasta que fue citado a la práctica de la Liquidación Provisional para el día 1 de octubre de 2016.

Ha quedado probado en autos que el Alcalde de Ágape también ostentaba el cargo de presidente de la Junta General de la sociedad mercantil pública Suministros S.L. cuyo capital social pertenecía en su integridad a la referida Corporación Local. En el ejercicio de su cargo de presidente firmó el 7 de febrero de 2008 un aval por el que asumió el riesgo de tener que hacer frente a la deuda que se produciría en caso de impago del préstamo personal concedido a una empresa privada que suministraba comida al Ayuntamiento para fines sociales. La competencia para poder adoptar dicho compromiso correspondía a la Junta General de la referida sociedad Suministros S.L. y necesitaba de previa autorización del Pleno del Ayuntamiento. Sin embargo, fue el Alcalde quien firmó el aval sin acuerdo de la Junta General y sin autorización del Pleno.

La empresa privada dejó de pagar las dos últimas cuotas del préstamo personal que le había sido concedido, por lo que la entidad bancaria reclamó a la sociedad Suministros S.L. el

pago de estas dos cuotas, realizándose el mismo el 8 de abril de 2012, por importe total de 250.000 €.

El Interventor del Ayuntamiento no realizó el control previo del gasto por tratarse de una sociedad mercantil, pero en su informe de control financiero recogió que se había realizado el pago sin advertir irregularidad alguna en el mismo.

4) La última pretensión de responsabilidad contable corresponde al alquiler de un inmueble cuyo precio se pactó en el contrato de arrendamiento celebrado el 1 de enero de 2010 en 3.000 €, con una actualización superior al IPC para los ejercicios siguientes. La pretensión de responsabilidad contable se dirige contra el Alcalde, que fue quien firmó el contrato de arrendamiento, y contra el Interventor, quién no formuló reparo alguno.

Obra unido a los autos el contrato de arrendamiento en el que se pactó que la renta se actualizaría de la siguiente manera:

- En 2011 el IPC más 4 puntos
- En 2012 el IPC más 7 puntos
- En 2013 el IPC más 6 puntos
- En 2014 el IPC más 5 puntos

El importe que se pagó durante estos ejercicios superó en 9.113,58 € la cantidad que se habría abonado si la actualización del alquiler se hubiese hecho aplicando el IPC.